

# EL IMPACTO ECONOMICO

El sismo del 13 de enero azotó con furia devastadora gran parte del territorio nacional, causó la muerte de varios centenares de personas y dejó más de un millón de damnificados. Este desastre natural produjo una catástrofe económica y social que por el número de muertes y ser los pobres, el principal grupo poblacional perjudicado, envuelve un drama humano con desesperante secuela de dolor y sufrimiento. A esa catástrofe se ha sumado el otro duro golpe ocasionado por el terremoto del martes 13 de febrero, fenómenos que combinadamente arrasaron pueblos enteros y agravaron la deplorable condición de pobreza que abate al grueso de los habitantes de El Salvador.

Al momento de escribir estas líneas, sólo por la primera vibración telúrica, la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), de forma preliminar, estimaba en un monto superior a mil 200 millones de dólares los daños directos e indirectos, siendo los rubros más perjudicados la vivienda (\$245.2 millones), las comunicaciones y transporte (\$375.3 millones). Se estima que de los costos globales corresponden \$615.7 millones al sector público y \$593.5 millones al sector privado, con un costo de reposición cercano a mil 600 millones de dólares. Otras estimaciones duplican el monto total de daños.

Comparando los costos relativos provocados por los terremotos recientes y el de 1986, podemos calificar que el de hace 14 años fue más destructor en sentido económico (daños cercanos a un tercio del PIB de ese período), pero los de enero y febrero pasados, arrojan comparativamente un mayor costo social para el país, al ser afectada una mayor extensión del territorio perjudicando los municipios y sectores poblacionales históricos y estructuralmente más vulnerables de nuestra sociedad.

Por encima de todo, la magnitud de los efectos de las destructoras sacudidas nos hacen recordar aquel dicho que dice «lo barato sale caro», aplicado aquí sería que los costos eludidos en el pasado son resarcidos a futuro, pues inexorablemente la naturaleza se encarga de cobrar con una cuarta más, y pasando la factura a quienes no la deben. Estos «ahorros» obtenidos por los constructores en cantidad y/o cali-

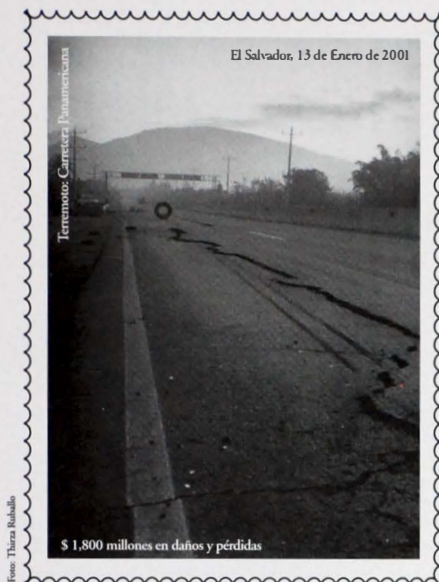
dad de los materiales utilizados en contra de las especificaciones técnicas, en la no realización de obras de prevención de aludes, insuficientes estudios de suelo, hacen más dramáticas las consecuencias. La evasión de las responsabilidades que tienen la finalidad de garantizar la vida humana, u otras inconfesas motivaciones: son posible en nuestros países por la pobre legislación, la insuficiente supervi-

sión de los organismos encargados, y por la corrupción en su aplicación.



## Pérdidas en Infraestructura Vial

La red vial es uno de los componentes que mayores daños soportó con el desplazamiento de placas en la costa del pacífico. La carretera panamericana fue severamente afectada por derrumbes que bloquearon el paso de automotores, a la altura de Los Chorros y en el tramo de la curva La Leona. Este último, había sido habilitado después de los derrumbes y hundimientos que el sismo del 13 de febrero ocasionó. Posteriormente se obligó al cierre definitivo del tránsito de vehículos y se habilitó una vía alterna para el transporte hacia la zona de oriente. Dada la naturaleza del terreno que bordea los tramos de carretera dañados, la solución trasciende a una simple reparación y despeje de escombros.



Carreteras secundarias como las que conducen a Comasagua, fueron cerradas por el riesgo a nuevos derrumbes. Se adicionan daños sobre 9 de los 30 caminos rurales sostenibles que estaban en construcción con un costo de reparación superior a 45 millones de colones, y bloqueos en 108 caminos vecinales, en zonas cafetaleras que requieren ser despejados para superar la incomunicación entre las fincas y permitir la cosecha de café que falta.

Una característica del país es su frágil estructura vial, más que por su calidad, por la limitada disponibilidad de carreteras; estos cierres y bloqueos han provocado un incremento del costo del transporte, atrasos y dificultades para el acceso a municipios y unidades productivas que cultivan café y la movilización de personas y mercaderías. Incidentes que obstaculizan el abastecimiento y circulación de la producción que en última instancia afectan la competitividad del aparato productivo.

### Servicios Básicos, Edificios Públicos y Patrimonio Cultural

Fuera de la interrupción momentánea de las telecomunicaciones y con mayor temporalidad la distribución de energía eléctrica, servicios que fueron rehabilita-

dos mayoritariamente en las diferentes zonas el mismo día del primer terremoto, no ocurrieron perjuicios considerables en estos rubros. Por el contrario, podemos juzgar de aceptable la capacidad de restablecimiento de los servicios, similar a lo observado durante el terremoto del año 1986. Fue la distribución de energía eléctrica la que tuvo ligeras pérdidas, concentradas en la primera semana con la contracción de la demanda (10 por ciento) luego del sismo, efecto normal dada la inmediata paralización del aparato productivo y lenta reactivación en los primeros días.

Sin embargo, para el caso de la distribución de agua potable, las pérdidas han sido sensibles tanto por su cuantía económica, inicialmente estimada por la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en 7 millones de dólares pero que según CEPAL el monto es de 15.4 millones de dólares, como por la magnitud física ya que han sido afectados, entre otros, 177 sistemas de agua, particularmente ubicados en los municipios mayormente golpeados por los sismos, debiendo efectuarse la demolición de 5 tanques captadores de agua dañados. Además de la intensidad de los movimientos telúricos, la dimensión de los daños se explica en parte por la obsoleta infraestructura de cañerías que dispone ANDA, puesto que los gastos de capital en el sector se han focalizado en la expansión de la capacidad instalada, descuidando la inversión de reposición, con el resultado que no se ha sustituido oportunamente luego de cumplir su vida útil.

A la cobertura históricamente insuficiente y de dudosa calidad del servicio, un efecto crítico adicional por dichos daños es una menor calidad del agua potable que se está sirviendo obviamente sobre los grupos poblacionales que gozaban esta prestación desde antes de los terremotos. Para aquellos lugares en donde aun no se restablece el vital líquido, los peligros de contaminación y epidemias son de una alta probabilidad.

Por su parte, el sector público sufrió daños en por lo menos 900 edificaciones, lo que repercutirá en su eficiencia y capacidad de gestión, además de incrementar los gastos de operación por requerirse en algunos casos de alquilar instalaciones para normalizar su funcionamiento mientras se reparan las dañadas o se construyen las edificaciones sustitutas.

En los rubros que abarca esta sección el mayor impacto del terremoto recae sobre el patrimonio cultural e histórico del país. Los considerables daños económicos que ocasionó el terremoto sobre el patrimonio nacional (superior a los 100 millones de colones) resultan más dramáticos en términos sociales para el presente y nuevas generaciones, máxime que en ciertos casos no son restaurables los sitios afectados (iglesias coloniales, zonas arqueológicas) en el sentido de reproducir la riqueza histórica y cultural perdida. El

lamentable abandono en que se encontraban algunos activos del patrimonio nacional, se le suma ahora la mutilación de la cultura y memoria histórica del país por causas de los desastres naturales en cuestión.

### Infraestructura social

Considerando los costos sociales, indudablemente, son las pérdidas en viviendas y destrucción o deterioro en establecimientos de educación y salud las secuelas del terremoto que mayor impacto tendrán, en las condiciones de vida de los salvadoreños. En la primer catástrofe los daños estimados en salud alcanzan 40.3 millones de dólares 81.6 millones de dólares en educación.

Según declaraciones del ministro de Salud y Asistencia Social, José López Beltrán, el 25 por ciento de la infraestructura quedó seriamente dañada. Los reportes oficiales informan que son 6 Hospitales y 28 Unidades de Salud los establecimientos afectados, de los cuales algunos deberán ser demolidos. Entre los más dañados se ubica a los Hospitales de Nueva San Salvador, Zacatecoluca, San Miguel y Usulután. La capacidad de atención, ya de por sí ordinariamente saturada en situación normal, fue agravada con el abrupto incremento de la demanda de servicios médicos por los heridos y enfermedades colaterales después del terremoto; la dramática realidad enfrentada por los centros localizados en las áreas con principal incidencia sísmica, obligó al traslado de pacientes a otras instalaciones de salud pública cercanas y en algunos casos a centros hospitalarios más distantes.

La sacudida del 13 de enero hizo colapsar cerca de mil 700 escuelas, que necesitan reparación, demolición o nueva construcción. Inicialmente fueron 372 escuelas las destruidas o con severos daños; algunos establecimientos educativos a los que se había otorgado bandera verde, con el zarandeo del 13 de febrero, y por estar ubicados en zonas de mayor impacto, colapsaron y provocaron la muerte de niños y maestros, tragedia que no ocurrió en enero pues aun no se iniciaba el año escolar.

El elevado costo de reposición y el tiempo necesario para la reconstrucción de los establecimientos de salud y educación afectados, presagia inexorablemente grandes dificultades para recuperar el endeble progreso. Es un retroceso social cuyo impacto se aproxima a una expansión de la pobreza alrededor de 10 por ciento de acuerdo con proyecciones del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

La repercusión tan pronunciada sobre las condiciones de vida de la población se refuerza por la masiva destrucción de viviendas dejadas por los terremotos, el 60 por ciento de la zona rural fue afectada. Después del primer sismo se contabilizó la destrucción total de 108 mil 226 viviendas, además 169 mil 632 dañadas y 688 soterradas. La sacudida de febrero agregó 36 mil 379 viviendas a la fatídica estadística. Los daños directos e indirectos en materia de vivienda se valúan en 245.2 millones de dólares.

Si bien, lentamente el país había estado reduciendo el déficit crónico de vivienda (4 por ciento entre 1992 y 1997), cuyo saldo acumulado a finales del año 2000, fue de 551 mil casas, en el lapso de un mes se elevó en 58 por ciento, es decir, que dos terremotos socavaron los logros de esos 5 años en concepto de combate al problema estructural de vivienda en el país, equivalentes a 13 periodos futuros de construcción de la misma duración en tiempo y similar ritmo de producción anual de casas, lo que supondría otro medio siglo para recuperar el mismo nivel de déficit habitacional al inicio del presente siglo.

A pesar que el parque de viviendas existente en el país previo al terremoto no gozaba en su totalidad de condiciones adecuadas según mínimos parámetros de estándar de vida, lo cierto es que ahora miles de familias duermen en la interperie o en albergues humildes e inseguros.

Dado el enorme costo de reposición y masiva destrucción, es de esperar que enormes contingentes de damnificados no lleguen a disponer de soluciones decentes en un corto o mediano plazo. Muchas familias incluso quedarán fuera de la ayuda básica de emergencia que está brindando el gobierno en la



Terremoto en San Salvador, 13 de Enero de 2001

El Salvador, 13 de Enero de 2001

\$ 1.800 millones en daños y pérdidas

Foto: Theresia Balcells

## IMPACTO ECONOMICO DEL TERREMOTO \*

Componente	DAÑOS DIRECTOS	DAÑOS INDIRECTOS	TOTAL	PUBLICO	PRIVADO	TOTAL
	718.0	493.8	1,211.8	615.7	593.5	1,209.2
<i>INFRAESTRUCTURA</i>	85.7	311.4	397.1	162.8	234.4	397.2
Comunicaciones y Transporte	71.3	304.0	375.3	151.1	224.2	375.3
Energía	2.3	4.1	6.4	3.3	3.2	6.5
Agua y Saneamiento	12.1	3.3	15.4	8.4	7.0	15.4
<i>ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</i>	201.4	50.5	251.9	15.2	236.6	251.8
Agricultura, Ganadería y Pesca	32.1	30.0	62.1	13.4	48.7	62.1
Industria	36.4	8.9	45.3	-	45.2	45.2
Comercio	69.9	6.0	75.9	-	75.9	75.9
Servicios	59.0	2.8	61.8	-	61.8	61.8
Turismo	4.0	2.8	6.8	1.8	5.0	6.8
<i>SECTORES SOCIALES</i>	266.8	102.0	368.8	364.9	27.3	392.2
Salud	28.3	12.0	40.3	36.3	4.0	40.3
Educación	52.5	29.1	81.6	81.6	23.3	104.9
Vivienda	184.9	60.2	245.1	245.2	-	245.2
Deportes	1.1	0.7	1.8	1.8	-	1.8
<i>PATRIMONIO</i>	164.1	7.0	171.1	72.8	95.2	168
Cultural e Histórico	96.9	6.9	103.8	5.8	94.9	100.7
Ambiental	67.2	0.1	67.3	67.0	0.3	67.3
<i>EMERGENCIA</i>	-	22.9	22.9	-	-	-
Limpieza y Remoción de Escombros	-	22.9	22.9	-	-	-

FUENTE: CEPAL, publicado por la Prensa Gráfica, 20/Feb/2001

Nota: por inconsistencias se ha modificado algunas sumatorias o subtotales de la publicación original.

construcción de vivienda temporal para afrontar el próximo invierno. Las medidas sugeridas por gremios de la construcción de brindar subsidios de 20 ó 30 mil colones para acceder a la compra de viviendas con valores de 85 mil colones, son excluyentes de amplios sectores afectados, cuyos ingresos además de bajos no son permanentes ya que trabajan por temporadas únicamente. La respuesta estatal a través de la oferta del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPO) resulta abrumadoramente insuficiente frente al voluminoso cúmulo de nuevos requerimientos de vivienda emergentes desde el 13 de enero. Las soluciones demandadas imperativamente deben ser creativas y adecuadas a la condición económica precaria que prevalece en los damnificados que necesitan de ayuda solidaria.

## Sectores Productivos

Luego de afrontar un panorama recesivo por casi tres años, el sector agropecuario dio muestras de reactivarse desde mediados de 1999, por la mejoría temporal en los precios internacionales del café, así como presentó tasas de crecimiento positivas en el cultivo de granos básicos, las que se esperaban fortalecer al volver más competitiva ésta producción con la eliminación de las exoneraciones que dichos bienes agrícolas gozaban en el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Ahora, con los sismos recientes y fuerte descenso de la cotización externa del café, habrá que esperar que se rompa la tendencia favorable por la que atraviesa el sector.

Efectivamente, en el sector agropecuario se concentró mayormente el impacto sobre el aparato productivo: las pérdidas según la CEPAL, se estiman en 62.1 millones de dólares, aunque los cálculos informados por el ministerio de Agricultura y Ganadería citaban pérdidas por un valor de 140 millones de dólares. De los 85 beneficios de café 59 han sufrido daños, entre los cuales 27 colapsaron o quedaron muy averiados; arriba del millar de manzanas destinadas a la caficultura fueron perjudicadas; de la cosecha que estaba pendiente de recoger (15 por ciento), sólo una quinta parte podrá recolectarse, dado los derrumbes que azotaron estas zonas y la obstrucción de 108 caminos internos en las fincas.

A la sensible baja de precios internacionales del café (actualmente en la banda de los \$60/qq) y de otros productos agrícolas, más una probable reducción en el funcionamiento de los distritos de riego por daños en la infraestructura, se le añade los temores y el desánimo para trabajar en donde ocurrieron derrumbes que derivan en escasez de cortadores. Todos estos factores combinados llevan a un descenso de rentabilidad, particularmente en la caficultura, que anula los ínfimos atractivos existentes para invertir en esta rama agrícola, por lo que es de esperar un fuerte impacto negativo en la generación de empleo.

Los actuales pulmones del país, otrora basamento del poder oligarca durante estuvo en boga el modelo

agroexportador, resultaron muy perjudicados, incluso devastados en amplias zonas cafetaleras de los departamentos de Usulután y la Libertad, por lo que el impacto ecológico es incierto.

Con el encarecimiento de la tierra para fines urbanísticos, a los propietarios de terrenos en los que se cultivaba café, la venta por lotes o del total de las fincas ha sido una alternativa al decidir abandonar la actividad agrícola por la pérdida de rentabilidad. Sin embargo, es muy probable que las tragedias que arrastraron los movimientos telúricos infundan temores en los potenciales compradores que reversion durante tiempo indefinido la demanda de las localizaciones boscosas para la construcción de viviendas, últimamente apetecidas por sectores de altos ingresos pero que ahora es de esperar buscarán zonas planas y alejadas de cerros.

Por su parte, el subsector pesca ha entrado en crisis al escasear su «materia prima» en el litoral; no se sabe que se hicieron los peces y camarones luego del terremoto. Hay varias hipótesis que explican dicha ausencia: la perturbación provocada por el sismo puede haber llevado a un estrés masivo en las especies marinas que los impulsaron alejarse de las costas, los sedimentos removidos afectaron los mecanismos de respiración y produjo una liberación de gases y tóxicos que los ahuyentaron o una combinación de todos estos factores. Lo cierto es que las embarcaciones cada vez que salen regresan sin las cantidades de pesca necesarias para

#### Infraestructura física dañada o destruida y derrumbes provocados por el terremoto del 13 de enero de 2001.

Departamento	Edificios públicos dañados	Viviendas dañadas	Viviendas destruidas	Viviendas soterradas	Derrumbes	Iglesias dañadas	Muelles dañados	Hospitales dañados**	Unidades de salud dañadas	Otros centros de salud
La Libertad	48	14,558	15,723*	687	202	43	-	1	13	2
La Paz	272*	25,106*	17,996*	-	55	36	-	1	9	1
Sonsonate	38*	17,773*	10,501*	-	64	69	-	1	6	-
Santa Ana	5	13,925*	4,823*	-	25	31	39	2	1	-
Cuscatlán	47	4,703*	4,155*	-	16	2	-	1	1	1
Usulután	235*	30,716*	29,301*	-	32	78	-	2	7	7
San Salvador	76*	12,836*	10,372*	-	133	9	-	6	14	-
San Miguel	23	10,624*	2,902	-	26	38	4	3	12	-
San Vicente	40	16,917*	5,218*	-	4	12	-	-	1	-
La Unión	98	2,380*	352*	-	1	5	-	-	-	-
Ahuachapán	60*	18,540*	693*	-	12	14	-	1	6	-
Cabañas	31	1,153*	309*	-	4	4	-	1	5	-
Morazán	35*	94*	5*	-	-	1	-	-	-	1
Chalatenango	47*	307*	16	-	-	2	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,155*</b>	<b>169,632*</b>	<b>108,226*</b>	<b>1</b>	<b>574</b>	<b>344</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>75</b>	<b>12</b>

Fuente: Sitio Web del Comité de Emergencia Nacional: [www.cem.gov.sv/estadisticas.htm](http://www.cem.gov.sv/estadisticas.htm)

\* Datos corregidos según La Prensa Gráfica, 13 de febrero de 2001, p.4

\*\* En establecimientos de salud se reportaron 107, junto a unidades de salud y otros centros de salud.

## El impacto económico

que sea rentable la actividad, lo que invita a la paralización de operaciones, principalmente en la pesca artesanal. Ello preocupa tanto por la generación de empleo e ingresos como por el desabastecimiento del mercado.

No obstante de ser un sector abandonado, el agro se había mantenido como un bastión en supervivencia para la generación de empleo en el campo; la tragedia ha sacudido la economía familiar campesina, y la nueva crisis rural que se avecina significaría un peligroso reforzamiento de los cinturones de pobreza y un poderoso estímulo a la renovación del fenómeno migratorio del campo a la ciudad por la falta de ocupación, que presionaría la frágil situación del empleo informal en las principales urbes. Para modificar este panorama será crucial devolverle al sector agropecuario su impopularidad y prioridad en las decisiones de política económica, lamentablemente sepultadas por la errada creencia que las acciones públicas sectoriales son un mecanismo obsoleto, idea dominante en la última década y ampliamente difundida por el ministro promotor de la dolarización durante la administración de Armando Calderón Sol. Esta desgracia natural ya no deja espacios para soslayar la urgente modernización que demanda el agro y asignación de recursos crediticios accesibles, con opciones creativas de capitalización que sean incluyentes y no dejen por fuera a los pequeños productores.

Para el sector industrial las expectativas tampoco son halagadoras. La tendencia al cierre de empresas iniciado en 1995, se recrudeció el año recién finalizado, al dejar de operar 400 establecimientos industriales y la respectiva baja de oportunidades de empleo, mayormente de la pequeña y mediana empresa. Se considera que la salvación de la manufactura ha recaído en la expansión de actividades de la maquila cuyo aporte propició un incremento neto positivo del empleo que genera el sector, con posibilidades de un fuerte impulso luego de la ampliación de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) que entró en vigencia en octubre del año 2000.

Sin embargo, las esperanzas cifradas en ésta opción para empujar el crecimiento económico, están ensombrecidas con



el terremoto, a pesar de que sólo el 5.8 por ciento de las empresas industriales registraron daños severos y de manera general la maquinaria resultó intacta según declaraciones del director ejecutivo de la Asociación de Industriales (ASI).

Muchas empresas para sosiego de la planta laboral, precaución u otros imperativos de fuerza mayor han estado despachando a los trabajadores a sus casas, experimentado cierres parciales y/o temporales; un problema complementario radica en los inconvenientes que han surgido para el abastecimiento de materias primas importadas y el transporte de productos terminados por el bloqueo de carreteras, más eventuales obstáculos aduaneros de naturaleza administrativa en el paso

fronterizo con Guatemala, y adicionalmente por el temor y desestímulo que irradian las persistentes y continuas réplicas, cuyo final es incierto.

Situación adversa que se agrava con el recrudecimiento de la ola de secuestros, sucesos que con gran facilidad anulan los incentivos a la producción y exportación preferente al mercado estadounidense que acompañan la ampliación de la ICC, puesto que ahuyentan o como mínimo postergan decisiones de inversión, no sólo extranjera sino también la nacional.

Con este panorama es comprensible que los publicitados proyectos de interés de algunas compañías extranjeras para que se instalen nuevas empresas maquileras en el país, hasta ahora no sobrepasen más allá de las intenciones y frenen las inversiones. De nada sirven las calificaciones favorables otorgadas al país por prestigiosas firmas extranjeras que clasifican riesgos, si prevalecen aquellos factores negativos y trascendentales al momento de analizar expectativas y toma de decisiones por parte de los potenciales inversores.

Tampoco es despreciable el efecto que tienen los vientos recesivos de la economía norteamericana y su incidencia en los niveles de venta y pedidos de artículos de consumo a los potenciales proveedores extranjeros, cuyos efectos



se comienzan a percibir al anunciarse el recorte de puestos de trabajo en algunas empresas maquileras con presencia en diversos países incluyendo El Salvador; más las dificultades aduanales, ojalá temporales por no estar elaborado el reglamento para que entre en operación efectiva la legislación aprobada por el congreso, que favorece a la maquila originaria de los países beneficiarios de la ICC.

Cualquier evento producto de la naturaleza o de la mano del hombre arrastra perdedores y beneficiarios. A la segunda categoría pertenecen dentro de esta tragedia los comerciantes grandes y pequeños de productos alimenticios, agua y otros artículos que facilitan enfrentar más tranquilamente las secuelas de un desastre, incluyendo materiales de construcción básicos para atender la emergencia. En dichos establecimientos comerciales las ventas no sólo se han mantenido sino que incluso en lo inmediato al evento se incrementaron por la habitual vorágine previsor de los habitantes.

Sin embargo, el comercio en su conjunto presenta una tendencia contractiva en sus niveles de operación, pues el impacto neto ha sido la declinación de las ventas, fruto de un descenso en la demanda interna y alteraciones en el patrón de consumo por la psicosis colectiva. Combinado con la suspensión de licitaciones públicas, este fenómeno económico, en parte, es el común desenlace por la pérdida de fuentes de trabajo y consecuente pérdida de poder adquisitivo, en adición a la influencia del motivo precaución en el comportamiento de los consumidores que invita a realizar principalmente sólo las compras necesarias e imprescindibles, postergando otras adquisiciones menos importantes y las de carácter suntuario. Un caso particular lo muestran las librerías y papelerías que con la demora en el inicio de clases no han podido aprovechar según es tradición la temporada alta al comienzo del año escolar.

Esta tendencia declinante de las ventas se espera que a medida pase el tiempo se revierta, aunque es vacilante su-

poner que durante el presente año se reactive el nivel de actividad alcanzado el año pasado, mientras no cambien las condiciones sísmicas y económicas lo suficiente como para modificar las expectativas psicológicas que motivan un comportamiento conservador de compra en los consumidores, altamente influenciados por la incertidumbre surgida con los terremotos.

Las estimaciones por el primer sismo alcanzan 80 millones de dólares por daños directos e indirectos sobre el comercio y dirigentes empresariales han informado descensos en las ventas del 25 al 50 por ciento, posterior al terremoto del 13 de enero, lo que se explica por la menor demanda y el cierre por destrucción parcial o total de pequeños establecimientos que han sido los más afectados por los sismos y cuyos dueños se ven en aprietos para normalizar sus operaciones, ante la dificultad de obtener los fondos requeridos para la rehabilitación, ya que no es común en estos segmentos la contratación de seguros que cubran riesgos sísmicos. En adición a no ser sujeto de crédito cerca del 80 por ciento de propietarios que forman el sector de la micro y pequeña empresa, o por su localización en las zonas desbastadas por los terremotos.

## Sector Externo

Los efectos sobre el sector externo dependen de muchos factores y según cuáles prevalezcan, se mantendrá o no la posición favorable que ha gozado el país en el último quinquenio. La potencial dinámica recesiva de la economía norteamericana lleva a dudar que las remesas continúen expandiéndose al mismo ritmo de los últimos años, por lo que en todo caso, ya sería alentador que solamente se mantenga el nivel récord alcanzado el año pasado (mil 750 millones de dólares).

Por el deterioro de la capacidad productiva exportadora en concepto de caficultura en unión a exiguos precios del grano en los mercados internacionales y perspectivas inciertas para la expansión de la actividad maquiladora, arriba mencionadas, es valioso suponer que el dinamismo superior al de las importaciones que en el último año venían observando las exportaciones, cambie de rumbo, lo que significa vientos amenazadores de que la cuenta corriente verá deteriorada la situación favorable alcanzada en el primer semestre del año 2000.

El efecto ingreso sobre las importaciones ante una eventual recesión o estancamiento de la economía por las secuelas que irradie el terremoto, muestran diversas direcciones: por una parte, motivaría una reducción en las importaciones de bienes de consumo e intermedios por el descenso de la actividad comercial, menor producción y desempleo

emergente; por otro lado, estimularía incrementos en las importaciones de bienes sustitutos de la producción doméstica primaria y manufacturera que halla salido afectada y no recupere su capacidad abastecedora del mercado local. En particular, llama la atención de que una masiva actividad de reconstrucción demandaría gran cantidad de insumos superior a las ventas que ordinariamente han venido atendiendo los almacenes y ferreterías; adicionalmente, dependiendo de las posibilidades y niveles de financiamiento, podrían impulsarse las importaciones de bienes de capital originadas por inversiones de reposición que demande la rehabilitación y/o reconstrucción: por ejemplo, se mencionaba que cerca del 6 por ciento de empresas del sector industrial habían sido dañadas, parte de los daños incluyen también maquinaria y equipo.

De ser exitosas las gestiones para la obtención de préstamos en la comunidad financiera internacional, la cuenta de capital podría arrojar un saldo neto compensador de la, aquí supuesta, posición deficitaria de las operaciones corrientes, esto a pesar que no hay indicios claros que anuncian una mejoría sustancial en la encarecida factura petrolera que nos afecta desde el año pasado. Lamentablemente, la experiencia hace dudar que los resultados sean los esperados conforme las agobiantes necesidades creadas por el terremoto y superen la capacidad local de respuesta.

Pero no hay signos que hagan previsible una pérdida de reservas que en última instancia ponga en peligro la dolarización en marcha por la escasez del dólar, considerando que las disponibilidades de reservas internacionales netas equivalen alrededor de seis meses de importación y exceden las necesidades de liquidez internas, aparte que la demanda de la moneda estadounidense luego del terremoto

se ha atenuado ante la preferencia lógica del colón por razones pragmáticas.

## Crecimiento Económico y Empleo

Si previo al sismo de enero ya eran cuestionables las proyecciones económicas oficiales previstas para el año 2001, el contexto externo desfavorable, preocupante pero entendible en cierto modo dentro de un marco político-publicitario, luego que el gobierno se enfascara en el proyecto de la dolarización como salvación al desarrollo de una crisis que anteriormente rechazaba su existencia, no obstante evidenciada por una reactivación de la desaceleración de la actividad económica en el 2000; fueron sorprendentes las declaraciones optimistas que importantes funcionarios del gabinete económico realizaron a dos semanas de ocurrido el terremoto.

No comprendemos las declaraciones que ratificaban las metas económicas manteniendo inalterables las expectativas de crecimiento (de 3.5 a 4.5 por ciento) trazadas en el programa monetario para el año 2001, bajo el endeble argumento que la dolarización en combinación con las negociaciones comerciales finalizadas y la ampliación de la ICC, tenían el potencial colosal para atraer la inversión extranjera y nacional requerida para tales fines, pese a los dantescos daños del sismo con mediana y suficiente precisión conocidos ya en esa fecha.

Esta confianza o inusitada ingenuidad no tiene en cuenta que esos factores y el supuesto incremento de las remesas familiares a raíz de la adopción del dólar como moneda de curso legal, no son instancias neutras a tragedias de la naturaleza como las vividas en el país y/o al repunte ampliamente divulgado de las expectativas recesivas, o en el mejor de los casos desaceleradoras, en la economía norteamericana a la cual estamos fuertemente atados y de la cual somos múltiple dependientes: en exportaciones, importaciones, remesas familiares, etc. Peor aun resulta soslayar en la ratificación de las proyecciones el efecto de la destrucción de capacidad productiva en sectores claves de la economía nacional, que a lo sumo únicamente podría restablecerse durante el presente año.

Al renunciar al uso de la política monetaria y centrar las esperanzas del país en factores externos fuera de nuestro dominio y que actualmente muestran un comportamiento espontáneamente conspirativo con-

El Salvador, 13 de febrero de 2001



\$ 1,800 millones en daños y pérdidas



tra los intereses del país, adquiere fuerza la idea de que no hay indicios que nos inviten a pensar que podremos lograr el crecimiento programado o incluso a menores tasas. Frente a tal realidad y siendo conscientes de los graves problemas heredados por los sismos recientes, sería suficientemente alentador que por lo menos no sucediera una contracción de la actividad económica.

Esta posibilidad se fundamenta en los programas de reconstrucción que puedan iniciarse, cuyo impacto dependerá de la prontitud y agilidad para recaudar fondos externos a través de donaciones o préstamos, que pongan en marcha los proyectos y que se superen los obstáculos que alimentan la ineficiente ejecución que caracteriza al sector público en materia de inversión. No podemos seguir dependiendo al azar de los factores externos, pues las actuales circunstancias imponen la prueba. La reactivación de la economía dependerá casi exclusivamente de la mano visible del sector público.

La capacidad de generación de empleo de la economía ha resultado deteriorada con los terremotos, siendo mayormente golpeada la del sector agropecuario, por la inactividad en que se han sumido múltiples zonas agrícolas, y en los sectores de la micro y pequeña empresa al dificultárseles rehabilitar los negocios dañados. Se ha informado según estimaciones iniciales que con el primer terremoto se perdieron 4 mil 620 empleos permanentes y 171 mil jornaleros no podrían retornar a sus actividades en la siembra y recolección de café; además, la pérdida de más de 30 mil empleos en la micro y pequeña empresa en zonas urbanas.

Es preocupante imaginar el panorama de presión que se avecina sobre el sector informal, con las emigraciones que podrían producirse desde las zonas afectadas en búsqueda desesperada de soluciones, lo que terminará expandiendo la formación de microempresas probablemente en condiciones de subsistencia; según proyecciones de la Alianza para el Desarrollo de la Microempresa (ALPIMED) podrán surgir hasta 56 mil nuevas pequeñas unidades económicas a raíz del terremoto, mayormente creadas por quienes resulten desempleados.

Como telón de fondo tendríamos un incremento de los bolsos de pobreza ante el deterioro de la ya precaria capacidad de creación de oportunidades de trabajo. Por lo tanto, acelerar la ejecución de las actividades de rehabilitación y reconstrucción asume doble importancia: atender las necesidades de la población damnificada y daños sobre el aparato productivo, y contener que se deprima la demanda interna en dirección a contrarrestar las adversidades que se prevén en los mercados externos.

Al momento no se augura una arremetida inflacionaria por shocks de oferta a partir de los daños en el aparato pro-

ductivo, puesto que en el descenso de la capacidad local para abastecimiento del mercado tienen salida las importaciones que cubran la demanda interna. Solución factible debido a la disponibilidad de capacidad de pago externa y el anclaje del tipo de cambio por la dolarización que, incluso, tornan relativamente baratas las compras en el extranjero; es decir, que el costo se reflejaría en la balanza comercial.

## Oportunidades y Desafíos

La proyección de un déficit fiscal de 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2001, (previo a los sismos), pareciera que no era realista teniendo en cuenta la insuficiente capacidad efectiva de recaudación tributaria y la demanda de transferencias que comienza a presionar el nuevo sistema de pensiones que se estimaba arriba de mil millones de dólares para los próximos cinco años, más la pérdida de ingresos tributarios en concepto de importaciones que suscitara la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales suscritos por el país.

Al reto en materia de sanidad financiera que la dolarización impuso al sector fiscal, a fin de consolidar el proceso de introducción de la nueva moneda con menores inconvenientes, (desafío que por cierto no ha sido aceptado por las autoridades hacendarias), se le adicionan ahora las exigencias de mayor gasto público que surgen con los terremotos de enero y febrero, por el apoyo del Estado a los afectados y la rehabilitación de daños a la infraestructura, la necesidad de alquilar edificaciones mientras se resuelve el problema de las que salieron perjudicadas, etc. Es de esperar que sea menor la recaudación por todo lo que pase en el nivel de actividad económica.

Cada cierto tiempo el país enfrenta reformas impositivas que se venden como la salvación a problemas de rigidez en la estructura tributaria y otros factores que vuelven ineficaz e ineficiente la recaudación, para cubrir las necesidades de gasto público que requiere el país. Recordamos el aumento del 3 por ciento a la tasa de IVA, a medio quinquenio de la década de los noventa y posteriores ampliaciones a la base imponible de este tributo. Sin embargo, los resultados evidencian recurrentes fracasos al persistir y agravarse la situación financiera del sector público; en aquella época el déficit fiscal rondó el 6 por ciento del PIB y actualmente es cinco veces superior.

Los recientes esfuerzos por modernizar e innovar el accionar de la administración tributaria, incluso contratando costosas consultoras, no producen frutos importantes al concentrarse en cuestiones poco relevantes, pero muy fáciles de trabajar: fuera de las cacareadas campañas de limpieza con la carísima participación de todo el personal, elaboración



Fotografía: Thirza Roballo

de voluminosos documentos con procedimientos que, por obvias razones, han terminado guardados en los estantes por falta de utilidad real, e irrelevantes certificaciones internacionales para entidades de la administración tributaria. La insuficiencia de la recaudación sigue siendo un mito insuperable y dolor de cabeza para las autoridades de Hacienda. Otras medidas administrativas como las dirigidas a garantizar la consecución de objetivos sobre la base de indicadores para la programación, el monitoreo y evaluación de la gestión, no han tenido el suficiente interés y apoyo.

Tradicionalmente la salida financiera en momentos de tribulación fiscal ha recaído en una menor y pobre ejecu-

ción de los gastos de inversión presupuestados. Con la emergencia actual acudir a ese artificio sería el tiro de gracia para las apremiantes perspectivas de crecimiento económico.

Ahora que la necesidad de recursos es apremiantemente y mayor los resultados que ya se conocen de la recaudación de enero no son esperanzadores, le espera al fisco un notable desafío, hasta el más optimista titubea al señalar que pueda estarse en capacidad de mejorar si se mantiene el mismo accionar precario de los últimos años. Desearíamos abrumadoramente equipararnos para recompensa del país y de los sufridos damnificados.

Para enfrentar este desafío coadyuvaría la aplicación real de medidas de austeridad en rubros de gasto que no resten eficacia al accionar gubernamental, tal es el caso de las erogaciones superfluas, en combinación con esfuerzos eficientes por reducir los niveles de evasión. Dado lo escabroso del combate a la evasión, es el momento propicio para que las autoridades de Hacienda valoren lo productivo que es impulsar una especie de «pacto fiscal» con los principales contribuyentes, en dirección al aumento voluntario en el pago de impuestos, particularmente sobre la renta, bajo un escenario de apoyo político al gobierno, más o menos, parecido al

observado cuando inició gestiones la administración gubernamental de Alfredo Cristiani.

### Mayor disponibilidad de Recursos Externos

Es triste que sólo en momentos de tragedia la comunidad internacional nos conceda atención medianamente prioritaria. Por lo tanto, sería contraproducente desaprovechar los instantes en que el drama económico, social y humano que han ocasionado los nefastos terremotos y por la conmoción generada en diversos países, se estimule la solidaridad externa, estando conscientes que ésta

condición no es eterna y tiene un horizonte de corta duración.

La oportunidad es valiosa. Ya hay ofrecimientos de préstamos, encabezando la lista de organismos el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE, 75 millones de dólares) y El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyo presidente al visitarnos personalmente nos animó a tomar conocimiento, sobre las necesidades financieras para la reconstrucción. Los requerimientos multimillonarios que demanda la reconstrucción difícilmente podrán ser satisfechos, pero el camino está allanado con las declaraciones vertidas por representantes de la comunidad internacional.

No sabemos el potencial de cooperación real y efectivo que tiene la reunión del grupo consultivo en Madrid. Sin embargo, es evidente que una posición de país unificada real y no cosmética, permitiría, en mejor y mayor medida, aprovechar sin duplicidad de esfuerzos los sentimientos de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional que asista al evento. Para lograr mayor ayuda el Gobierno tendría el compromiso de manejar los fondos percibidos en forma transparente, con la participación activa de la sociedad civil y en particular de los beneficiarios. Por tanto, las fuerzas políticas, económicas y sociales tienen el reto de superar o por lo menos, administrar los distanciamientos acrecentados por las disputas de la presente coyuntura.

### Gestionar condonación de la deuda externa

Eliminar la posibilidad de gestionar condonaciones de la deuda externa en aras de difundir una imagen a la comunidad financiera internacional que somos responsables y honramos los compromisos adquiridos, no es consistente con la cruda realidad que abate a la nación y sus voluminosas necesidades de reconstrucción. Ni siquiera es válido dejar a la suerte o suprema discreción de los países y organismos acreedores, la toma de decisiones sobre el particular, ya que desaprovechamos pretensiones unilaterales de países u organismos que pudieran estar interesados en cooperar con el país condonando deuda suscrita o modificando plazos y tasas, y aun no han hecho público la intención, para cuya decisión y aprobación sólo estén esperando la solicitud o muestra de interés en obtener el beneficio.

Además, desconocemos la capacidad real de apoyo en recursos frescos que la comunidad internacional proveerá en comparación a las buenas intenciones y promesas informadas o por ofertar, pero la experiencia recurrentemente nos ilustra que son predicablemente modestas.

Insistir en nuestra voluntad y capacidad de pago, solamente garantiza obtener condiciones menos blandas que las posibles cuando nos sinceramos sobre nuestras necesidades, capacidades y dramáticas realidades, más allá del discurso emotivo que busca impactar la opinión pública internacional.

No se habla de gestionar la condonación de la deuda externa total en un recuadro de perdón automático, sino un llamado a la solidaridad urgente y lo más generoso posible de la comunidad internacional, como aportes al fondo de reconstrucción que necesita el país a través de la condonación de parciales segmentos de los compromisos financieros con los acreedores, que pasan desde las obligaciones del servicio de la deuda (intereses, cuotas de capital o ambas) por un tiempo o simples reestructuraciones de plazos y quizás tasas, hasta la liquidación total como lo ofreció España.

Por lo tanto, procede no descartar este tipo de ayuda, cuya concesión por parte de los organismos o países amigos que lo deseen, no afectaría nuestra calificación y posición (por cierto modesta) en el mercado financiero internacional, considerando que sería voluntaria y no derivada de negativas al pago del servicio de la deuda respectiva. Mejor si se atropa con matices de cooperación técnica, para lo que es



importante y necesario adjuntar y comprometer proyectos a los que podría adjudicarse, teniendo en cuenta rubros o áreas de interés para los potenciales condonadores-donantes. Importante desafío al que deben sumarse nuestras representaciones diplomáticas, explorando las posibilidades e impulsando el cabildeo para acceder a dichas modalidades de cooperación.

Hay que reconocer que las decisiones que acompañan las buenas intenciones, enfrentan múltiples dificultades para llegar a concretarse e inexorablemente las necesidades desbordan las posibilidades, por lo que no debemos, pecando de optimistas, cifrar nuestras esperanzas en las voluminosas promesas. La experiencia en estos casos es que pasado los primeros momentos de la tragedia, la burocracia de las organizaciones internacionales se impone sobre las buenas voluntades, para dar paso a un angustioso y lento cumplimiento. Hay menos obstáculos que superar cuando sólo se modifican los compromisos financieros en marcha reorientando el destino de un préstamo. La experiencia con el BID es ilustrativa al respecto.

En todo caso, puesto que las mayores opciones de ayuda internacional se encuentran en la obtención de nuevos préstamos, lo que significa trasladar a las futuras generaciones el costo y que tengan menos posibilidades de endeudamiento para financiar sus proyectos de desarrollo. Mientras menor sea la carga de deuda que se les herede, no sólo atenderemos las necesidades del presente sino también seremos responsables con el futuro. Por lo tanto, la condonación de deudas en los términos aquí apuntados, es una medida complementaria que además de favorecer el objetivo de reducir la brecha entre las disponibilidades de recursos frente a las necesidades, tendría adicionalmente el beneficio de aminorar los costos trasladados a las futuras generaciones.



Terremoto: Maquila, San Salvador

El Salvador, 13 de Enero de 2001

\$ 1,800 millones en daños y pérdidas

Foto: Thirza Baballo

## Revisión del Modelo de Crecimiento y Acumulación de Capital

Los estragos que heredó el conflicto bélico de los años ochentas, reforzado por el desfavorable entorno internacional con la caída de precios de los principales productos que comercializamos en el exterior, ha desembocado en la reducción sensible de su rentabilidad, provocando bajos o nulos incentivos para que los agricultores produzcan o inviertan en las unidades productivas. Por los fuertes daños a la infraestructura productiva, incluida la producción cafetalera y el resto del sector agropecuario, hemos enfrentado una inesperada complicidad de la naturaleza acrecentando las precariedades del agro, fomentadas por la marginación que tuvo el sector en las decisiones y orientación de la política económica de la última década.

La tragedia ha recrudecido la evidencia y las constantes denuncias de abandono del sector agropecuario a lo largo de las tres últimas administraciones presidenciales, denotan la pérdida de importancia dentro de la estructura de la producción que registra la contabilidad nacional. Sin embargo, ésta reducción no es fiel reflejo del soporte e importancia del campo.

Este sector continúa siendo el principal generador de empleo, por lo que la consecuente reducción de su participación dentro de la distribución del ingreso, explica fácilmente el panorama de pobreza que ensombrece las condiciones de vida de las comunidades campesinas y el traslado de contingentes poblacionales a las ciudades engrosando los bolsones de pobreza.

De fondo persiste la pérdida de interés por la demanda interna como motor de crecimiento, pretendiendo sustituirse con la conquista de mercados externos y atraer la inversión extranjera en aras de instaurar un modelo de desarrollo hacia fuera. Además de la desmedida apertura externa, los incentivos que contiene la política económica se han concentrado en actividades productivas de bienes no tradicionales con demanda foránea, resaltando el fomento de la maquila, cuyo éxito ha sido posible pero gracias al acceso de un trato preferencial otorgado por Estados Unidos a El Salvador. Si perdemos este beneficio desaparecería la actividad de ensamblaje textil, entre otras.

No es despreciable el aporte en empleo que genera la maquila, pero el bonancible desarrollo de esa rama productiva resulta frágil por estar basado en las denominadas inversiones golondrinas, cuyas perspectivas son altamente dependientes de factores fuera de nuestro dominio, además que camina con un horizonte de crecimiento limitado a las cuotas de acceso preferencial al mercado estadounidense

Fotos: Thirza Ruballo



autorizadas, por lo que ha sido necesario no sólo posibilitar el ingreso de su producción al mercado nacional sino también ampliarlo en niveles que resultan desigualmente competitivas con la industria local. Es urgente considerar y fomentar opciones complementarias que generen empleos no precarios. Como el vecino país de Costa Rica, nación que prioriza la inversión social en las asignaciones del presupuesto nacional.

Renovar la apuesta al mercado interno, además de ser factible no excluye la maquila. De concretarse lograríamos ampliar nuestras posibilidades de crecimiento y mejoramiento de la retribución en los factores de la producción, particularmente el trabajo, para el cual la maquila sólo despierta previsiones de mayor injusticia cuando se pretende bajar el salario mínimo para zonas del país con escaso progreso, con el fin de volver atractivo la localización de dichas empresas en departamentos pobres.

Siguiendo esta lógica, El Salvador en lugar de cosechar frutos que formula el enunciado de la teoría del comercio internacional que determina un mayor uso del factor abundante y consecuentemente barato, logrará incrementar su cotización en el mercado según cambie su situación de abundante a escaso; por el contrario la búsqueda de discutibles fines de competitividad, agravarían la precaria condición de vida establecida por el actual salario mínimo, cuyo nivel no alcanza a cubrir la canasta básica. Ante esto la pretensión de reducir el salario mínimo se convierte en una medida que aproximaría al país a un ambiente de abierta explotación.

No debemos seguir descuidando y desaprovechando el potencial que detenta el mercado interno. Los reajustes que permite la tragedia sísmica, convierten la crisis en oportunidad para repensar el modelo de crecimiento y acumulación de capital, siendo necesario la mano visible del sector público por medio de racionales, eficaces y equitativas políticas sectoriales.

La tragedia demanda múltiples acciones al Estado, incluida la urgencia de revisar la decisión de continuar como simple espectador en la economía dentro de un esquema *laissez faire*, o asumir un rol de orientador-coordinador en la asignación de recursos y definición de prioridades, a fin de garantizar la consecución de objetivos de crecimiento económico con carácter sostenible, para colocar al país efectivamente en la ruta del desarrollo social.